

**DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO CIRCUITO
PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SINCELEJO
JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE
SINCELEJO**

Sincelejo, Sucre, abril, veintiuno (21) de dos mil veintiuno (2021)

Solicitud: Extinción de la pena por pena cumplida
Decisión: Concedida
Condenados: Yair Eduardo Méndez Pérez
Osmeider Méndez Pérez
Delito: Hurto Calificado y Agravado
R. I. No. 2018-00456-00
R. O. No. 2016-00244-00-00
Ley: 906/2004

ASUNTO A TRATAR

Decidir la solicitud de libertad definitiva por pena cumplida, radicada por el apoderado de los condenados **YAIR EDUARDO MENDEZ PEREZ** y **OSMEIDER MENDEZ PEREZ**.

1. ANTECEDENTES PROCESALES

Los señores **YAIR EDUARDO MENDEZ PEREZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.100.338.915 expedida en Palmito (Sucre), y **OSMEIDER MENDEZ PEREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.100.336.220 expedida en Palmito (Sucre), los condenó el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Santiago de Tolú, Sucre, mediante sentencia de fechado mayo, 9 de 2017, a la **PENA PRINCIPAL DE CINCUENTA Y CUATRO (54) MESES DE PRISIÓN E INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS**, como autor responsable de la comisión del **DELITO DE HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO**, negándole los subrogados penales.

Mediante auto fechado septiembre, 26 de 2019, este despacho le concedió la prisión domiciliaria como mecanismo sustitutivo de la pena de prisión intramural, previa suscripción de acta de compromiso y pago de caución prendaria por valor de **CIEN MIL PESOS (\$ 150.000) MCTE**, beneficio perfeccionado el día 18 de septiembre de 2015.

2. CONSIDERACIONES

El art. 1º de la Constitución Política consagra que nuestro país es un Estado social de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, esto último establecido como una norma rectora de la ley sustancial penal y un principio rector de la Ley 65 de 1993.

Ahora bien, el inciso 3 del art. 28 de la Constitución Política establece que en ningún caso podrá haber penas y medidas de seguridad imprescriptibles, disposición que se complementa con el art. 34 de referida norma constitucional que prohíbe la pena prisión perpetua.

La H. Corte Constitucional en sentencia T-276 de 2016, respecto a la libertad personal señaló lo siguiente:

“(...) La libertad personal es un principio y un derecho fundante del Estado Social de Derecho cuya importancia se reconoce en diversas normas constitucionales: (i) en el Preámbulo de la Carta como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la Nación; (ii) en el artículo 2º se establece como fin esencial del Estado el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, asignando a las autoridades el

deber de protegerlos; y (iii) en el artículo 28 se consagra expresamente que “Toda persona es libre” y contempla una serie de garantías que buscan asegurar el ejercicio legítimo del derecho y el adecuado control al abuso del poder, como el derecho a ser detenido por motivos previamente definidos por el legislador y en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente.”

Esto es, la libertad proporciona una triple naturaleza jurídica, en el entendido en que al igual que la dignidad humana y la igualdad, la libertad tiene una naturaleza polivalente en el ordenamiento jurídico colombiano, pues se trata de manera simultánea de un valor, un principio y, a su vez, muchos de sus ámbitos son reconocidos como derechos fundamentales plasmados en el texto constitucional.

De esta manera, dada la prescriptibilidad de las penas, debemos llegar a la inexorable conclusión de que las mismas se extinguen, poniendo fin a la obligación del condenado de cumplir la pena que la ley señala por la infracción cometida, disposición constitucional que se encuentra acorde con los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia que hacen parte del bloque de constitucionalidad y, que por ende, hace parte de nuestro ordenamiento jurídico¹.

Por su parte, el art. 3º del Código Penal, establece que la pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado, señalando el artículo 10 de la Ley 65 de 1993, que el tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario.

Respecto a este tópico, la Corte Constitucional en sentencia C-806 de 2002, M. P., Dra. Clara Inés Vargas Hernández, señaló lo siguiente:

“(…) La pena cumple una función de prevención especial positiva, es decir, debe entenderse que la pena debe, entre sus varias finalidades, buscar la resocialización del condenado, obviamente dentro del respeto de su autonomía y dignidad, pues el objeto del derecho penal en un Estado social de derecho no es excluir al infractor del pacto social, sino buscar su reinserción en el mismo.”

El anterior concepto tiene como fin último que el interno logre resocializarse y reintegrarse a la colectividad por medio de la construcción de un nuevo proyecto de vida.

De otro lado, el artículo 7A de la Ley 65/93, adicionado por el artículo 5º de la Ley 1709 de 2014, establece que los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad tienen el deber de vigilar las condiciones de ejecución de la pena y de las medidas de seguridad impuesta en la sentencia condenatoria.

El art. 88 del Código Penal consagra las causas de la extinción de la sanción penal en los siguientes términos:

“Artículo 88. Extinción de la sanción penal. Son causas de extinción de la sanción penal:

1. La muerte del condenado.
2. El indulto.
3. La amnistía impropia.
4. La prescripción.
5. La rehabilitación para las sanciones privativas de derechos cuando operen como accesorias.
6. La exención de punibilidad en los casos previstos en la ley.

¹La Declaración Universal de Derechos Humanos como documento jurídico internacional y reconocedor de los mismos, hace referencia a tal derecho en su artículo 3, indicando que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 9 numeral 1, expresa que “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.”

7. Las demás que señale la ley.”

Tenemos que las causas de la extinción de la sanción penal son aquellas específicas circunstancias que acaecen después de cometida la infracción, anulando la ejecución de la pena o extinguiéndola en caso de que se den cualquiera de los anteriores causales, lo que trae como consecuencia que para el sujeto activo de la conducta punible desaparece la obligación de soportar y tolerar la pena impuesta.

Ahora que, si bien es cierto, dentro de las seis (6) primeras causas de extinción de la sanción penal no se encuentra señalada la concerniente a la pena cumplida, resulta plausible y razonable que esta situación sea asumida como otra causal de extinción, habida cuenta que las consagradas en dicha disposición sustancial tiene los mismos efectos jurídicos, como son la de cesar el cumplimiento físico de la pena impuesta y el recobro la libertad en caso de que se encuentre restringida la misma, por lo que, de ampliarse la reclusión de quien ya cumplió su sanción resultaría contraria a sus garantías constitucionales y legales, pudiéndose en consecuencia encuadrar esta situación en la última causal de dicha disposición, esto es, las demás que señale la Ley, que para el caso sería traer a colación el contenido del numeral 1º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, que consagra como una causal de libertad, cuando se ha cumplido la pena según la determinación anticipada que para este efecto se haga, o se haya decretado la preclusión, o se haya absuelto al acusado.

3. CASO CONCRETO

Se observa en el caso de marras que los ciudadanos **YAIR EDUARDO MENDEZ PEREZ** y **OSMEIDER MENDEZ PEREZ**, los capturaron el día ocho (8) de septiembre de 2016, imponiéndole medida de aseguramiento de detención preventiva en Establecimiento Carcelario de Mediana Seguridad de Sincelejo, Sucre.

Seguidamente, el nueve (9) de mayo de 2017, por parte del **JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ**, Sucre, se profirió la sentencia condenatoria a la **PENA PRINCIPAL DE CINCUENTA Y CUATRO (54) MESES DE PRISIÓN**, negándole los subrogados penales establecidos en el libro primero parte general del código penal.

Mediante providencia fechada septiembre 26 de 2019, este juzgado le concedió a los condenados **YAIR EDUARDO MENDEZ PEREZ** y **OSMEIDER MENDEZ PEREZ**, la libertad incondicional y le reconocieron un tiempo físico de **TREINTA Y SEIS (36) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS**, a la fecha de hoy (21 de abril de 2021) transcurrió un término de **DIECIOCHO (18) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS**, PARA UN TOTAL DE **CINCUENTA Y CINCO (55) MESES Y TRECE (13) DÍAS**, lo que nos indica que han cumplido la totalidad de la pena impuesta, quien por demás habrá que señalarse que cumplieron a cabalidad las obligaciones consagradas en el art. 38 del C.P. y en el acta de compromiso para disfrutar del beneficio de la prisión domiciliaria que se le concedió por esta judicatura, puesto que no existe incidente alguno tendiente a la revocatoria de dicho mecanismo sustitutivo de la pena.

Líbrese la correspondiente boleta de libertad a su favor, por lo que se ordenará al EPMSC de Sincelejo (Sucre) a fin de que conceda la libertad inmediata de estos condenados, haciéndole saber que solo podrán recobrar su libertad si no son requeridos por otra autoridad judicial.

Como quiera que estos condenados constituyeron caución para gozar del beneficio de la prisión domiciliaria, se ordenará la devolución de la caución prenda por valor de **CIENTO CINCUENTA MIL PESOS (\$ 150.000) MCTE**, consignados el día 11 de octubre de 2019, en la cuenta de depósitos judiciales de este juzgado. Oficiese para tal fin.

Notifíquese esta decisión a los condenados, a su apoderado judicial, al agente del Ministerio Público y al Establecimiento Carcelario de Sincelejo (Sucre).

Enviar por secretaría las comunicaciones a las autoridades encargadas de llevar registros de anotaciones y antecedentes delictuales, para lo de su competencia.

Una vez ejecutoriada esta providencia, remítase el expediente al Juzgado de Santiago de Tolú, Sucre, para su archivo definitivo.

Conforme lo advierte el art. 176 del Código de Procedimiento Penal, en contra de la providencia proceden los recursos ordinarios de reposición y apelación.

En mérito de lo brevemente expuesto, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Sincelejo,

RESUELVE:

PRIMERO: Declárese extinguida por pena cumplida a favor de los PPL **YAIR EDUARDO MENDEZ PEREZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.100.338.915 expedida en Palmito (Sucre), y **OSMEIDER MENDEZ PEREZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.100.336.220 expedida en Palmito (Sucre), la pena de **CINCUENTA Y CUATRO (54) MESES DE PRISIÓN**, impuesta por el JUZGADO PRIMERO PROMISCOU MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE SANTIAGO DE TOLÚ, mediante providencia fechada mayo, 9 de 2017, toda vez que se ha cumplido la totalidad de la pena impuesta, tal y como se esbozó en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Líbrense la respectiva boleta de libertad a favor de los PPL **YAIR EDUARDO MENDEZ PEREZ** y **OSMEIDER MENDEZ PEREZ**, haciéndole saber al EPMSC de Sincelejo (Sucre) que los condenados solo podrán recobrar su libertad si no son requeridos por otra autoridad judicial.

TERCERO: Ordenar la devolución a favor de los PPL **YAIR EDUARDO MENDEZ PEREZ** y **OSMEIDER MENDEZ PEREZ**, la caución prenda por valor de **CIENTO CINCUENTA MIL PESOS (\$ 150.000) MCTE**, consignados el día 11 de octubre de 2019, a la cuenta de depósitos judiciales del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Sincelejo. Ofíciase para tal fin.

CUARTO: Enviar por secretaría las comunicaciones a las autoridades encargadas de llevar registros de anotaciones y antecedentes delictuales, para lo de su competencia.

QUINTO: Notifíquese esta decisión al condenado, a su apoderado judicial, al agente del Ministerio Público y al Establecimiento Carcelario de Sincelejo (Sucre).

SEXTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, remítase al Juzgado Primero Promiscuo de Santiago de Tolú, Sucre, para su archivo definitivo.

SÉPTIMO: Contra esta decisión proceden los recursos ordinarios de reposición y apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ARTURO GUZMAN BADEL
Juez